



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-019-2019 00184-01 (21-033)
Demandante: ASTRID ELENA TORRES DUARTE
Demandados: COLPENSIONES E.I.C.E.
POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Procedencia: JUZGADO DÉCIMO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN
Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ - CALIFICACIÓN INTEGRAL DE
LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL

En Medellín, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), **la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y CARLOS JORGE RUÍZ BOTERO, resuelve el **Recurso de Apelación** formulado por ASTRID ELENA TORRES DUARTE dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por **ASTRID ELENA TORRES DUARTE** en contra de la ADMINSTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-005-019-2019 00184-01 (21-033).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

La señora ASTRID ELENA TORRES DUARTE, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria en contra de la ADMINSTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., con el fin de obtener el reconocimiento una pensión de invalidez de origen profesional, el pago de las mesadas que se hubieren causado desde la fecha en que se estructuró dicho estado, los intereses por la mora en el reconocimiento de la prestación, o en subsidio, la indexación, y las costas del proceso, lo cual fundamentó en que el 08 de octubre de 2014 sufrió un accidente de trabajo, al caerse de la motocicleta que conducía; que ARL Positiva S.A. calificó una pérdida de capacidad laboral del 0%, estructurada el 16 de mayo de 2017; que el dictamen fue modificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, reconociéndole un porcentaje 15,20%; que la ARL Positiva S.A. le pagó la suma de \$10.796.251 por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial, que desde la fecha de aquel accidente su miembro inferior izquierdo ha tenido soportar todo su peso corporal; que el 15 de enero de 2016 sufrió un trauma contuso de la rodilla izquierda, cuando se cayó desde su propia altura, que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con una pérdida de capacidad laboral del 28,46%, de origen común, estructurada el 11 de octubre de 2016; que solicitó a la ARL Positiva S.A. una recalificación de la pérdida de capacidad laboral de origen profesional, la que le dictaminó un porcentaje 18,35%, estructurada el 16 de mayo de 2017; que el dictamen fue modificado el 14 de diciembre de 2017 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, con un 25,25%, mismo que a su vez fue modificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con un 24,74%; que la suma de las calificaciones en firme de la pérdida de capacidad laboral de origen común y profesional arroja un 53,21%; que el 06 de septiembre de 2018 le solicitó a la ARL Positiva S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual el 21 de septiembre de 2018 le negó dicho el reconocimiento porque la pérdida de capacidad laboral era inferior al 50%; que el 31 de octubre de 2018 le solicitó a Colpensiones E.I.C.E. el reconocimiento de una pensión de invalidez de origen mixto, misma que el 20 de noviembre de 2018 le negó el reconocimiento de la prestación porque la pérdida de capacidad laboral se había calificado como de origen profesional, y que contaba con más de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de origen común y profesional.

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda fue admitida el 04 de abril de 2019 (Fol.73, Doc.01), y notificada a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado el 05 de abril de 2019 (Fol.75-76, Doc.01), a Colpensiones E.I.C.E. el 11 de abril de 2019 (Fol.79-80, Doc.01), al Procurador Judicial para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social el 25 de abril de 2019 (Fol.77-78, Doc.01), y a Positiva Compañía de Seguros S.A. el 27 de septiembre de 2019 (Fol.153, Doc.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. presentó escrito de contestación el 28 de mayo de 2019 (Fl.97-109, Doc.01), en el que admitió que el 20 de noviembre de 2018 negó el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen mixto solicitado por la demandante el 31 de octubre de 2018, y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en razón de que la actora no cuenta con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. igualmente presentó contestación el 07 de octubre de 2019 (Fl.169-190, Doc.01), en la que admitió que el 08 de octubre de 2014 la actora sufrió un accidente de trabajo, que el 30 de marzo de 2016 emitió calificación con un 0,0% de pérdida de capacidad laboral, dictamen que fue modificado el 30 de junio de 2016 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con un porcentaje de 15,20%; que reconoció a favor de la demandante la suma de \$10.796.251 por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial; que el 02 de marzo de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en el trámite de apelación a un dictamen proferido por Colpensiones E.I.C.E., dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 28,46%, de origen común, ante lo cual la actora le solicitó una recalificación y el 27 de agosto de 2017 le dictaminó un porcentaje del 18,35%, el que fue modificado el 14 de diciembre de 2017 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, con un 25,25%, y que éste, a su vez, fue modificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con un 24,74%. Agrega que el 21 de septiembre de 2018 negó el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional, reclamada el 06 de septiembre de 2018. Adicional a ello, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que la actora no cuenta con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

La controversia se dirimió en primera instancia el 10 de febrero de 2021, mediante sentencia proferida por el Juzgado Décimo Noveno Laboral del Circuito de Medellín, quien declaró probada la excepción de “inexistencia de la obligación” propuesta por COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., absolvió a las demandadas de las pretensiones formuladas por ASTRID ELENA TORRES DUARTE, y condenó en costas a la demandante, en consideración a que, en aplicación de los principios de integralidad y ponderación de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, no es viable simplemente realizar una suma aritmética de calificaciones separadas para determinar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de un afiliado.

1.3. Recurso de Apelación

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de apelación por el apoderado judicial de la parte actora, quien afirmó que la señora ASTRID ELENA TORRES DUARTE, cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 53,21%, porcentaje del cual, el 24,75% es de origen laboral y el 28,46% es de origen común, con nexo causal respecto del accidente laboral que originó la pérdida de capacidad laboral calificada como de origen profesional. Adicionalmente, afirmó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia dejó de hacer una calificación integral de las patologías de ambos orígenes, y porque la misma no alcanzaba el 50% de pérdida de capacidad laboral no consideró la recalificación hecha por la ARL Positiva S.A., por ser la misma posterior. Consecuentemente, solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, y se ordenara el reconocimiento de la prestación pensional deprecada.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El 19 de marzo de 2021 (Doc.09), se admitió el recurso antes descrito, y el día 26 del mismo mes y año (Doc.09), se corrió traslado a las partes para que, por escrito, presentaran los alegatos de conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020.

La parte recurrente no presentó alegaciones.

COLPENSIONES E.I.C.E. presentó alegatos de conclusión el 07 de abril de 2021 (Doc.11), con los que solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia, toda

vez que la demandante no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en la norma, esto es, una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, y que la misma sea de origen común, y por cuanto la normatividad ni la jurisprudencia contemplan el reconocimiento de una pensión de invalidez de origen mixto.

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. presentó alegatos de conclusión el 16 de abril de 2021 (Doc.12), en los que solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia, argumentando que la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la actora, de origen común y de origen profesional, se efectuó de forma separada, sin que sea posible sumar sus patologías de manera íntegra, en los términos del Decreto 1507 de 2014, y porque, en todo caso, la entidad ya canceló la respectiva indemnización que se causó por cuenta del accidente de trabajo.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si a la señora ASTRID ELENA TORRES DUARTE le asiste el derecho al reconocimiento y pago retroactivo de la pensión por invalidez deprecada, junto con los intereses de mora, o subsidiariamente la indexación, efecto para el que será necesario específicamente establecer ¿cuál es el procedimiento que debe aplicarse para la calificación integral de la pérdida de capacidad laboral?

2.2. SENTIDO DEL FALLO

La Sala confirmará la decisión absolutoria de primer grado, en cuanto que en el plenario no se encuentra acreditado el acaecimiento del riesgo por el cual se reclama el reconocimiento de la prestación pensional pretensa, esto es, porque en el plenario no obra prueba idónea que permita establecer que la señora ASTRID ELENA TORRES DUARTE se encuentra inmersa en un estado de invalidez.

2.3. Solución de los Problemas Jurídicos Planteados

2.3.1. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de invalidez de origen profesional?

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para garantizar una calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (Ley 100 de 1993, preámbulo).

El Sistema General de Riesgos Laborales fue entonces diseñado para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia directa o indirecta del trabajo que desarrollan (artículo 1º, Ley 1562 de 2012).

Su organización y administración se encuentran definidas en el Decreto 1295 de 1994, y la Ley 776 de 2002, y bajo su aplicación, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tiene derecho a la prestación de los servicios asistenciales de salud, como al reconocimiento de las prestaciones económicas de subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 776 de 2002, se considera en estado o situación de invalidez a la persona que, por causas de origen profesional, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral; y en atención a lo dispuesto en el artículo 10 del mismo compendio normativo, a quien se encuentre afecto a dicha situación o estado por causas de origen profesional, le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión, equivalente al 60% del ingreso base de liquidación, si la invalidez es inferior al 66%, y equivalente al 75% del mismo ingreso, si la invalidez es superior al 66%, monto que puede incrementarse en

un 15% adicional si la persona afecta por tal contingencia requiere del auxilio de otras personas para realizar las funciones más elementales necesarias y vitales.

2.3.2. ¿Cuál es el procedimiento que debe aplicarse para la calificación integral de la pérdida de capacidad laboral?

La pérdida de capacidad laboral es objeto de calificación por parte de Colpensiones, las administradoras de riesgos laborales, las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte para las administradoras de pensiones del régimen de ahorro individual, y por las entidades promotoras de salud (artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, que a su vez fue modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012). Dicha calificación es susceptible de impugnación ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, y las decisiones que estas emiten, son a su vez apelables ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; y en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).

El dictamen de pérdida de capacidad laboral es una experticia con valor probatorio, que contiene el concepto experto que se emite sobre el grado de la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte de un afiliado y debe fundamentarse en consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, en el que se relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar a la enfermedad o accidente, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron, al igual que el diagnóstico clínico de carácter técnico-científico, soportado en la historia clínica, la historia ocupacional y las ayudas de diagnósticas requeridas de acuerdo con la especificidad del problema.

Para el efecto de la calificación integral de la invalidez, las entidades calificadoras deben considerar los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, clasificados en el Decreto 1507 de 2014 en la valoración de las deficiencias, referidas a toda pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, y en la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, en la que se asume el impacto generado sobre aquellas áreas, de acuerdo con la etapa del ciclo vital en que se

encuentre la persona, incluyendo la integralidad, intencionalidad, elección, determinación, autonomía, planificación y la resolución, para el inicio, desarrollo o finalización de la actividad laboral u ocupacional y de otras propias de la persona.

Ahora bien, para la determinación del origen de la pérdida de capacidad laboral respecto de un afiliado en el concurren eventos de naturaleza común y profesional, las entidades calificadoras deben tener en cuenta que la existencia de patologías anteriores y de orígenes diversos, aumenta el grado de incapacidad del afiliado, y que por ello, la pérdida de capacidad laboral siempre tendrá que calificarse de forma integral, tal y como lo ha sostenido el máximo tribunal constitucional en la Sentencia C-425 de 2005, oportunidad en la que advirtió que una calificación de la pérdida de capacidad laboral restrictiva respecto del origen de las deficiencias, determinaría que al interior del Sistema Integral de Seguridad Social existiera un afiliado materialmente en estado de invalidez, con protección no solo especial sino igualmente reforzada a la luz de la Constitución, pero sin la posibilidad de acceder al reconocimiento de las prestaciones que consagra el subsistema de seguridad social en pensiones.

Teniendo en cuenta que el régimen prestacional que se aplica para los supuestos de invalidez es distinto según el origen de la pérdida de la capacidad laboral, es preciso determinar cuál es el régimen aplicable en los eventos de concurrencia de factores de distinto origen en la estructuración de dicha pérdida de capacidad laboral, y aunque en la Sentencia C-425 de 2005 la Corte Constitucional no hizo un pronunciamiento expreso sobre el particular, en la Sentencia T-518 de 2011 precisó que *"... cuando, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, una persona que tenía una pérdida de capacidad laboral preexistente, de cualquier origen, llega a un porcentaje superior al 50% de pérdida de la capacidad laboral, debe asumirse que se trata de un evento de origen profesional, y, por consiguiente, la fecha de estructuración debe fijarse a partir de los componentes profesionales de la discapacidad, y el régimen de la invalidez es el propio del sistema general de riesgos profesionales.*

Cuando ocurre el fenómeno contrario, esto es, cuando como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, una persona sufre una pérdida permanente de capacidad laboral inferior al 50% y luego, por factores de origen común ajenos a los factores profesionales ya calificados, ese porcentaje asciende a más del 50%, la fecha de estructuración debe fijarse a partir de la que

genera en el individuo una pérdida de su capacidad laboral en forma permanente y definitiva y, en este caso, el régimen aplicable será el común.

Cuando concurren eventos de una y otra naturaleza -común y profesional- en la determinación de la pérdida de capacidad laboral que conduzca a una pensión de invalidez, para establecer el origen y la fecha de estructuración, se atenderá al factor que, cronológicamente, sea determinante de que la persona llegue al porcentaje de invalidez. Y cuando se trate de factores que se desarrollen simultáneamente, para determinar el origen y la fecha de estructuración se atenderá al factor de mayor peso porcentual".

De este modo se tiene que, cuando sea preciso calificar la pérdida de capacidad laboral de una persona, las entidades competentes deberán, en todo caso, proceder a hacer una valoración integral, que comprenda tanto los factores de origen común como los de índole profesional.

2.4. Acervo Probatorio Recabado

En el plenario se encuentra acreditado que la señora ASTRID ELENA TORRES DUARTE nació el 18 de junio de 1976, sufrió un accidente de trabajo el 08 de octubre de 2014, cuando se cayó de una motocicleta, que las secuelas de aquel accidente fueron calificadas por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. con una pérdida de capacidad laboral del 0%, que éste dictamen fue modificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, quien determinó del 15,20%, de origen profesional, estructurada el 29 de febrero de 2016, y que con base en dicha calificación, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., le reconoció la suma de \$10.796.251, por concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial; afirmaciones que encuentran sustento fáctico en el documento de identidad (Fol.71, Doc.01), el Dictamen 907872 del 03 de marzo de 2016 (Doc.03 CD Fol.101), el Dictamen 60119 del 30 de junio de 2016 (Fol.19-22, Doc.01), y el Comunicado SAL-35834 del 05 de abril de 2016 (Fol.193, Doc.01).

Obra además constancia de que la actora fue posteriormente calificada por COLPENSIONES E.I.C.E. con una pérdida de capacidad laboral del 16,64%, de origen común, estructurada el 11 de octubre de 2016, que éste dictamen fue modificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la que le determinó un 28,46%, de origen común, estructurada el 11 de octubre de 2016, oportunidad

en la que la entidad calificadora expresamente indicó que *“En la calificación de las secuelas actuales, no se toma en cuenta la calificación del dolor residual pos trauma en rodilla derecha por accidente de trabajo, pues ésta y fue calificada por la JRCIA, y su calificación está en firme; y al calificar íntegramente no alcanza el 50% de PCL”*, tal y como se describió en el Dictamen 64502 del 02 de marzo de 2017 (Fol.23-28, Doc.01).

Adicionalmente, se encuentra acreditado que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. recalificó la pérdida de capacidad laboral de la actora en un 18,35%, de origen profesional, estructurada el 16 de mayo de 2017, dictamen que fue modificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la que le reconoció un porcentaje de 25,25%, y que este dictamen, a su vez, fue modificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual le asignó un 24,74%, conclusiones que se extraen de los Dictámenes 1147942 del 27 de agosto de 2017 (Doc.03 CD Fl.101), 69704 del 14 de Diciembre de 2017 (Fl.29-36, Doc.01), y 4383345-9386 del 25 de junio de 2018 (Fl.37-46).

3. CONSIDERACIONES

Atendiendo lo indicado en las premisas fácticas y normativas descritas en las líneas que anteceden, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Noveno del Circuito de Medellín, en la medida en que declaró probada la excepción de “inexistencia de la obligación” propuesta por COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al considerar que en el plenario no se encuentra acreditada la ocurrencia del riesgo de la invalidez, en tanto que no obra prueba idónea que permita establecer que la señora ASTRID ELENA TORRES DUARTE haya alcanzado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

En la dirección de formar su íntima convicción, la Sala ponderó que: (i) toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art.164 CGP); (ii) la prueba pericial es necesaria para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos (art.226 CGP); (iii) el dictamen de pérdida de capacidad laboral es el medio de prueba contentivo del concepto médico científico emitido sobre el grado de la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte de un afiliado (artículo 4º del Decreto 917 de 1999), y (v) que al plenario no fue allegada

ninguna experticia indicativa de que la actora padece de una pérdida de capacidad laboral superior al 50%.

Ahora bien, lo pretendido por la parte actora se orienta a que se efectúe una suma aritmética del resultado de la calificación que obra en el Dictamen 64502 del 02 de marzo de 2017 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en el que se calificó una pérdida de capacidad laboral del 28,46% de origen común, y el Dictamen 43833345-9386 del 25 de junio de 2018 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el que se calificó una pérdida de capacidad laboral del 24,75% de origen profesional, procedimiento que no tiene concordancia con el descrito en el inciso final del numeral 1º del Título preliminar del Anexo Técnico el Decreto 1507 de 2014, el cual, textualmente reza *“La calificación integral de la invalidez, es decir del 50% o más de pérdida de la capacidad laboral, procede conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-425 de 2005 de la Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial; que dispone que las entidades competentes deberán hacer una valoración integral, que comprenda tanto los factores de origen común como los de índole laboral”*.

Y aunque los jueces del trabajo son competentes para resolver las controversias que se susciten respecto de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, dicha facultad no permite que los mismos puedan dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de expertos conocedores en la materia, si el afiliado está realmente incapacitado para trabajar, cuál es la etiología de su padecimiento, ni cuál es el grado de la invalidez, (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Radicado 24392 del 29 de junio de 2005, Radicado 31062 del 18 de marzo de 2009, Radicado 35097 del 06 de marzo de 2012, SL-10538 del 29 de junio de 2016, Radicado 42451, y SL-877 del 26 de febrero de 2020, Radicado 73738), de donde se sigue que, sin asomo de duda, que la valoración integral pretendida por la demandante, corresponde efectuarla únicamente al ente competente para calificar la pérdida de capacidad laboral.

4. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los **artículos 365 y 366 del CGP**, y advirtiendo que el recurso de apelación interpuesto por ASTRID ELENA TORRES DUARTE no salió adelante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura**, se fijan como agencias

en derecho la suma de \$452.263, a favor de COLPENSIONES E.I.C.E. y la suma de \$452.263, a favor de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 10 de febrero de 2021, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ASTRID ELENA TORRES DUARTE en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de ASTRID ELENA TORRES DUARTE, fíjense como agencias en derecho a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., la suma de \$452.263, y a favor de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. la suma de \$452.263.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUELVA** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente

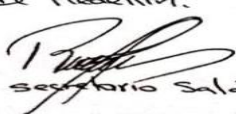

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretaral

Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.


SECRETARÍA SALA LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
REPUBLICA DE COLOMBIA

Certifico: Que la decisión anterior fue notificada por ESTADOS n.º 88 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a través de la página Web a las 8:00 a.m.
Medellín, 24 de mayo de 2021

Secretario